

RELACION DE SENTENCIAS  
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  
PUBLICADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE  
DE 1988

LUIS AGUIAR DE LUQUE

(con la colaboración de FERNANDO REY)

Sentencia núm. 1/88, de 13 de enero (núm. Reg. 38/88), «BOE» número 31.

Tipo de procedimiento: Recurso de amparo.

Ponente: Sra. Begué Cantón.

Fallo: Desestimatorio.

Actor: Particular.

Acto impugnado: Acuerdo de Junta General de Valle navarro.

Preceptos de referencia: Arts. 43.1, 44.1.a) y 50.1.b) de la LOTC.

Cuestiones analizadas: Falta de agotamiento de la vía judicial previa al recurso de amparo.

Comentario:

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 2/88, de 20 de enero (núm. Reg. 1231/88), «BOE», núm. 31.

Tipo de procedimiento: Recurso de amparo.

Ponente: Sr. López Guerra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Caja de Ahorros.

**Acto impugnado:** Auto de Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Arts. 14 de la CE y 1687.1 y 1710.2 LEC.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad en la aplicación de la ley.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 3/88, de 21 de enero (núms. Reg. 926/84 y 237/86), «BOE» núm. 31.

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. López Guerra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Promotor:** Sala de Audiencia Territorial.

**Acto impugnado:** Artículo 9 del Real Decreto-ley 3/1979, de 26 de enero, sobre seguridad ciudadana.

**Preceptos de referencia:** Artículos 25.1 y 86 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** El Decreto-ley: la prohibición constitucional de que no afecte los derechos regulados en el título I de la CE; su relación con el principio de legalidad en materia sancionatoria.

**Precedentes jurisprudenciales:** En relación con el primer asunto, los derechos del Tít. I CE en cuanto materia no susceptible de regulación por Decreto-ley, véanse Sentencias núms. 29/82, de 31 de mayo, y 111/83, de 2 de diciembre. Respecto al Decreto-ley y principio de legalidad en materia sancionadora, véanse Sentencias núms. 8/81, de 30 de marzo; 18/81, de 8 de junio; 77/83, de 3 de octubre; 87/85, de 16 de julio; 2/87, de 21 de enero, y 42/87, de 7 de abril.

**Comentario:**

La cuestión nuclear que tiene que resolver el Tribunal es la relativa a si los Decretos-leyes poseen el suficiente rango normativo para fijar tipos de ilícitos administrativos (el art. 9.3 del Decreto-ley impugnado atribuía potestad a la Administración para sancionar a las empresas que incumplieran las normas de seguridad reglamentariamente impuestas para prevenir la comisión de actos delictivos).

Para ello reitera su conocida doctrina acerca de que la potestad sancionadora de la Administración encuentra en el art. 25.1 CE el límite consistente en el principio de legalidad; y dado que el Decreto-ley posee fuerza y valor de ley, sería válida su utilización para la previsión de tipos ilícitos y las correspondientes sanciones administrativas. Se resuelven en la Sentencia, también acudiendo a doctrina precedente, dos problemas conexos con el anterior: el ámbito de la afectación constitucionalmente prohibida del Decreto-ley a los derechos y libertades del Título I CE (le está vedado a tal norma regular el régimen general de los derechos y el contenido o elementos esenciales de los mismos); y, en segundo término, el de la suficiencia o insuficiencia de la tipicidad de la norma de rango legal cuando ésta se remita a disposiciones reglamentarias («El art. 25.1 CE prohíbe la remisión al reglamento que haga posible una regulación independiente y no claramente subordinada a la Ley, pero no impide la colaboración reglamentaria de la normativa sancionadora»).

Sentencia núm. 4/88, de 21 de enero (núms. Reg. 102 y 452/86), «BOE» número 31.

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Promotores:** Magistratura de Trabajo y Sala de Audiencia Territorial.

**Acto impugnado:** Artículo 32 de la Ley 23/1984, de 2 de agosto, de Ordenación del Seguro Privado, en relación con el art. 4.6 del Real Decreto-ley 10/1984, de 11 de julio, por el que se establecen medidas urgentes para el saneamiento del sector de seguros privados y para el reforzamiento del organismo de control.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1, 117.3 y 118 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y ejecución de las decisiones judiciales.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 109/84, de 26 de noviembre; 158/87, de 2 de octubre; 167/87, de 28 de octubre; 205-87, de 21 de diciembre, y ATC núm. 171/86, de 19 de diciembre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente, concluyendo que los preceptos impugnados no erosionan el derecho a la ejecución de las sentencias (art. 24.1 CE) pues aunque el art. 32 de la Ley 23/1984 impone la paralización temporal y provisional de las ejecuciones derivadas de acciones individuales de acreedores de Entidades aseguradoras, no atenta la titularidad jurisdiccional de la potestad de ejecutar las sentencias, pues no atribuye a persona o Entidad distinta de los órganos jurisdiccionales tal potestad, siendo, además, una «medida razonable», que «atiende a finalidades constitucionalmente dignas de protección (la satisfacción del derecho del acreedor con crédito reconocido judicialmente y la efectividad del principio *par conditio creditorum*) y es proporcionada»; el art. 4.6 del Decreto-ley 10/1984, si bien obstruye el ejercicio de accionar de los acreedores contra la Entidad aseguradora en liquidación, no lo hace con carácter absoluto (obstruye fundamentalmente el inicio de procesos universales y sólo por tiempo limitado) y, por otra parte, el sentido de la norma es acorde con las exigencias de «razonabilidad y proporcionalidad».

**Sentencia núm. 5/88, de 21 de enero (núm. Reg. 1028/88), «BOE» número 31.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Auto de Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE y 154 y 170 de la LPL.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e inobservancia de requisitos procesales formales; significado de éstos; la exigencia de consignación previa al recurso de suplicación.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 9/83, de 21 de febrero; 19/83, de 14 de marzo; 40/83, de 18 de mayo; 53/83, de 20 de junio; 90/83, de 7 de noviembre; 100/83, de 18 de noviembre; 114/83, de 6 de diciembre; 70/84, de 11 de junio; 17/85, de 9 de febrero; 22/85, de 15 de febrero; 60/85, de 6 de mayo; 36/86, de 12 de marzo; 162/86, de 17 de diciembre; 109/87, de 29 de junio, y Auto núm. 88/84, de 15 de febrero.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 6/88, de 21 de enero (núm. Reg. 1221/86), «BOE» núm. 31.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díez-Picazo.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 20.1.a) y d) y 24 de la CE y 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores.

**Cuestiones analizadas:** Eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones entre privados. Las garantías del art. 24 no son aplicables en el ámbito disciplinario laboral. Principio de proporcionalidad. Las libertades de información y sus límites en el seno de las relaciones laborales; distinción entre la libertad de expresión y la de información.

**Precedentes jurisprudenciales:** a) Garantías del art. 24 y ámbito disciplinario laboral: Autos núms. 213/82, de 9 de junio; 664/84, de 7 de noviembre, y 683/84, de 14 de noviembre. b) Libertad de información en las rela-

ciones laborales: Sentencias núms. 6/81, de 16 de marzo; 11/81, de 8 de abril; 62/82, de 15 de octubre; 105/83, de 23 de noviembre; 120/83, de 15 de diciembre; 88/85, de 19 de julio; 104/86, de 17 de julio, y 159/86, de 16 de diciembre.

### Comentario:

Se trata de una sentencia de capital importancia en el tema constitucional de fondo que aborda. El actor, periodista de profesión, se hallaba ligado por una relación laboral con la Oficina de Prensa del Ministerio de Justicia y es despedido por unas declaraciones a miembros de la agencia «Europa Press», en las que anunciaba su propósito de dirigir un escrito al Subsecretario, exponiendo su preocupación por la filtración de noticias desde ese Ministerio a la Editorial Prisa. La causa del despido se basa en la deslealtad y abuso de confianza [falta muy grave prevista en el art. 54.2.d) del ET].

La sentencia comienza planteándose contra qué acto del poder público se formula el recurso. Obviamente, no le puede identificar con la Resolución del Ministerio mediante la que se despide al periodista, pues éste mantenía con aquél una relación jurídico-laboral y, por consiguiente, de índole estrictamente privada. Es por ello por lo que, utilizando el expediente habitual, cifra el acto objeto del recurso en la Sentencia del Tribunal Supremo, que presuntamente desprotege los derechos fundamentales del recurrente, inicialmente vulnerados.

Tras despejar esta cuestión inicial, la Sala se interroga si se ha producido violación en todos los derechos que argumenta el actor. Resuelve negativamente en relación a los principios de igualdad y de proporcionalidad (principio este «sólo relevante, en ciertos casos, cuando lo que se denuncia es un trato arbitrario o discriminatorio en las normas o en su aplicación») y a las garantías del art. 24 CE, pues, según doctrina precedente, no se extienden al ámbito disciplinario laboral. El punto nodal del recurso de amparo se centra, pues, en determinar si, en el caso de haber ejercido el actor la libertad de información, su limitación por la causa de despido que se le aplicó fue o no constitucionalmente correcta.

Ahora bien, se detiene antes la sentencia en distinguir la libertad de expresión de la información, pues ambas son citadas conjuntamente por el actor como presuntamente vulneradas. Mientras que la libertad de expresión tiene por objeto «pensamientos, ideas y opiniones», la de información, como ocurre precisamente en el caso planteado, versa sobre «hechos que puedan considerarse noticiables». La Sala precisa aún dos datos acerca de la libertad de información: su titularidad corresponde «a todas las personas» y, de otro lado,

«cuando la Constitución requiere que la información sea 'veraz', no está tanto privando de protección a las informaciones que puedan resultar erróneas —o sencillamente no probadas en juicio— cuanto estableciendo un específico deber de diligencia sobre el informador, a quien se le puede y debe exigir que lo que transmita como 'hechos' haya sido objeto del previo contraste con datos objetivos».

No obstante lo anterior, sostiene la sentencia que la existencia de una relación contractual entre trabajador y empresario genera un complejo de derechos y obligaciones recíprocas que condicionan el ejercicio de la libertad considerada (que debe realizarse, como en el resto de las libertades, «conforme a las exigencias de la buena fe» art. 7.1 del Código Civil). La Sala, sin embargo, no considera que existan en el caso razones para apreciar la legitimidad del despido (ni *animus nocendi*, ni empleo con fines privados de la información obtenida en el trabajo, ni incumplimiento de un deber de secreto, ni se acreditó en juicio la negligencia del periodista, etc.), por lo que otorga el amparo.

Sentencia núm. 7/88, de 21 de enero (núm. Reg. 120/87), «BOE» núm. 31.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Empresa Municipal.

**Acto impugnado:** Sentencia de Magistratura.

**Preceptos de referencia:** Artículo 44.1.a) LOTC.

**Cuestiones analizadas:** La obligación de agotar todos los recursos existentes antes de plantear el recurso de amparo.

**Comentario:**

Carece de interés doctrinal, pues la recurrente no agotó todos los recursos ante la jurisdicción ordinaria que, de acuerdo con la Ley, habría podido utilizar, y, por tanto, la Sala desestima la pretensión de amparo.

Sentencia núm. 8/88, de 22 de enero (núm. Reg. 106/87), «BOE» núm. 31.

Tipo de procedimiento: Recurso de amparo.

Ponente: Sr. De la Vega Benayas.

Fallo: Estimatorio.

Actor: Particular.

Acto impugnado: Sentencia de Juzgado de Instrucción.

Preceptos de referencia: Artículos 24.1 de la CE y 359 de la LEC.

Cuestiones analizadas: Derecho a la tutela judicial efectiva y congruencia de las resoluciones judiciales.

Precedentes jurisprudenciales: Sentencia núm. 142/87, de 23 de julio.

Comentario:

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 9/88, de 25 de enero (núm. Reg. 1174/86), «BOE» núm. 31.

Tipo de procedimiento: Recurso de amparo.

Ponente: Sr. Truyol Serra.

Fallo: Estimatorio.

Actor: Sindicato.

Acto impugnado: Acto de Dirección General.

Preceptos de referencia: Artículos 7 y 28.1 de la CE.

Cuestiones analizadas: Ambito de la libertad sindical.

Precedentes jurisprudenciales: Sentencias núms. 98/85, de 29 de julio; 39/86, de 31 de marzo; 165/86, de 18 de diciembre; 104/87, de 17 de junio, y 184/87, de 18 de noviembre.



**Comentario:**

En síntesis, el razonamiento de la sentencia es como sigue: si, como tiene declarado el propio Tribunal, un medio de acción sindical, como la representación colectiva de funcionarios, integra la libertad sindical (art. 28.1 CE), el acto objeto del recurso (la negativa, por silencio, de la Dirección General del INSS a convocar elecciones a Junta de representantes, desoyendo la solicitud de celebración del sindicato recurrente e impidiendo absolutamente su celebración) lesiona tal libertad.

Sentencia núm. 10/88, de 1 de febrero (núm. Reg. 442/87), «BOE» núm. 52.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1, 103.1, 106 y 117.3 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de la actividad judicial: *da mihi factum, dabo tibi ius*. El Juez no está vinculado a la calificación parcial de los hechos.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia 104/86, de 17 de julio.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 11/88, de 2 de febrero (núm. Reg. 156/87), «BOE» núm. 52.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Magistratura.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE y 72 y 79.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y significado de las exigencias formales; interpretación de las normas procesales más favorables a la efectividad del derecho y subsanación de defectos procesales advertidos.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 43/85, de 22 de marzo; 19/86, de 7 de febrero; 146/86, de 25 de noviembre; 118/87, de 8 de julio; 139/87, de 22 de julio, y 180/87, de 12 de noviembre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 12/88, de 3 de febrero (núm. Reg. 10/86), «BOE» núm. 52.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Latorre Segura.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 14 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley: la necesidad de motivar el cambio de jurisprudencia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Numerosos, en especial: Sentencia número 48/87, de 22 de abril.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 13/88, de 4 de febrero (núms. Reg. 67, 78 y 83/84), «BOE» número 52.

**Tipo de procedimiento:** Conflicto positivo de competencia.

**Ponente:** Sr. Truyol Serra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actores:** Gobierno vasco, Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña y Gobierno valenciano.

**Acto impugnado:** Real Decreto 2621/83, de 29 de septiembre, sobre Ferias Comerciales Internacionales.

**Preceptos de referencia:** Artículos 149.1.10 y 13 de la CE y 12.6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, 11.6 del Estatuto Catalán y 33.5 del Estatuto de Autonomía Valenciano.

**Cuestiones analizadas:** Distribución de competencias en materia de Ferias Internacionales.

**Comentario:**

El núcleo del conflicto radica en la impugnación que las tres Comunidades Autónomas realizan de la facultad que el art. 4.1 del Real Decreto 2621/1983 otorga al Ministerio de Economía y Hacienda para atribuir el carácter de internacional a una Feria, autorizar el uso de la denominación Feria Internacional de Muestras y establecer la normativa reguladora de las mismas. El Tribunal afirma que no puede reputarse inconstitucional tal precepto, pues sobre la materia en conflicto, las Comunidades Autónomas sólo poseen (si así lo han previsto sus respectivos Estatutos) competencias de ejecución de la legislación estatal. Distingue dos fases la sentencia en la actividad ferial internacional: una primera, la determinación coordinada de las Ferias a celebrar, competencia exclusiva del Estado (por afectar al comercio exterior —artículo 149.1.10 CE— y a la coordinación de la planificación general de la actividad económica —art. 149.1.13 CE—), aunque «nada se opone a que por el Estado se arbitren cauces de colaboración con las CC. AA. con competencia en la materia». Y otra segunda fase, la organización y desarrollo de la Feria, en la que se produce propiamente el reparto de competencias entre el Estado y las CC. AA. (competencia de ejecución de la legislación estatal).

Tampoco estima el Alto Tribunal el resto de impugnaciones que los promotores del conflicto realizaron, pero ya no unánimemente, sobre otros preceptos del Decreto: art. 6 (dispone que las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación coadyuven en la organización y desarrollo de las Ferias), pues con ello «en modo alguno las está haciendo partícipes de la potestad de ejecución de la legislación del Estado»; art. 8 (el Ministerio de Economía y Hacienda designará un Delegado permanente que será convocado a las reuniones del Comité Directivo de cada Feria), que no viola el principio de autoorganización administrativa de cada Comunidad Autónoma, pues el Delegado no se integra en dicha Administración y además no tiene atribuidas funciones de fiscalización y tutela, etc.

Sentencia núm. 14/88, de 4 de febrero (núm. Reg. 641/86), «BOE» núm. 52.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Latorre Segura.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Diligencia de ejecución de Sentencia de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Artículo 17.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a no sufrir privación de libertad por impago de cantidades adeudadas en concepto de responsabilidad civil y costas.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 15/88, de 10 de febrero (núm. Reg. 1312/86), «BOE» número 52.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Orden de Ministerio.

**Preceptos de referencia:** Artículos 14 y 32.2 de la CE. Artículo 4 de la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 21 de octubre de 1985.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad en el contenido de la norma: derecho a acceder en condiciones de igualdad a funciones y cargos públicos.

**Precedentes jurisprudenciales:** Entre otros, Sentencias núms. 22/81, de 2 de julio; 34/81, de 10 de noviembre; 42/81, de 22 de diciembre; 75/83, de 3 de agosto, y 50/86, de 23 de abril.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 16/88, de 15 de febrero (núm. Reg. 998/85), «BOE» núm. 52.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Auto de Magistratura.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24 de la CE y 154 de la LPL.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y consignación como requisito para el recurso de suplicación; significado de las exigencias formales; interpretación del derecho más favorable a su efectividad.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 3/83, de 25 de enero; 9/83, de 21 de febrero; 100/83, de 18 de noviembre; 13/84, de 3 de febrero; 20/84, de 13 de febrero; 76/85, de 26 de junio, y 180/87, de 12 de noviembre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 17/88, de 16 de febrero (núm. Reg. 1060/86), «BOE» número 52.

Tipo de procedimiento: Recurso de amparo.

Ponente: Sr. López Guerra.

Fallo: Desestimatorio.

Actor: Particular.

Acto impugnado: Sentencia de Juzgado de Instrucción.

Preceptos de referencia: Artículos 24 de la CE y 565.4 y 420.4 del CP.

Cuestiones analizadas: Derecho a la tutela judicial efectiva y principio acusatorio.

Precedentes jurisprudenciales: Sentencias núms. 12/81, de 10 de abril, y 105/83, de 23 de noviembre.

Comentario:

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 18/88, de 16 de febrero (núm. Reg. 1176/86), «BOE» número 52.

Tipo de procedimiento: Recurso de amparo.

Ponente: Sr. Díaz Eimil.

Fallo: Estimatorio.

Actor: Ente público RTVE.

Acto impugnado: Auto del Tribunal Central de Trabajo.

Preceptos de referencia: Artículos 24.1 de la CE, 181 de la LPL y 447 de la LOPJ.

**Cuestiones analizadas:** Postulación y representación del ente público RTVE. Derecho a la tutela judicial efectiva y doble instancia; el incumplimiento por Radio Televisión Española de la obligación de consignar el depósito previsto por el art. 181 de la LPL.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia núm. 180/87, de 12 de noviembre.

**Comentario:**

Sentencia idéntica a la citada como precedente, por resolver casos exactamente iguales tanto en sus circunstancias fácticas como en su fundamentación jurídica y petición.

**Sentencia núm. 19/88, de 16 de febrero (núm. Reg. 593/87), «BOE» núm. 52.**

**Tipo de procedimiento:** Cuestión de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Díez-Picazo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Promotor:** Juzgado de Instrucción.

**Acto impugnado:** Artículo 91 del Código Penal.

**Preceptos de referencia:** Artículos 9.2, 14, 17.1, 25.2 y 25.3 de la CE; 63, 91 y 93 del Código Penal.

**Cuestiones analizadas:** Requisitos del Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Naturaleza jurídica del arresto sustitutorio por impago de multa; igualdad en el contenido de la ley; arresto sustitutorio y derecho a la libertad; principio de culpabilidad; la reinserción social; prohibición de imposición de penas privativas de libertad al Derecho administrativo sancionador; principio de proporcionalidad de las penas.

**Precedentes jurisprudenciales:** a) Requisitos del Auto de planteamiento de la CI; Sentencias núms. 25/84, de 23 de febrero, y 83/84, de 24 de julio. b) En relación al resto de cuestiones conectadas al arresto sustitutorio: Sentencias núms. 75/83, de 3 de agosto; 114/83, de 6 de diciembre; 66/85, de 23 de mayo; 86/85, de 10 de julio; 98/85, de 29 de julio; 180/85, de 19 de diciembre; 65/86, de 22 de mayo, y 140/86, de 11 de noviembre.

**Comentario:**

Antes de pronunciarse sobre el conjunto de argumentos sobre el que el Juez promotor basó su duda de inconstitucionalidad sobre el art. 91 CP (que prevé el arresto sustitutorio en el supuesto de impago de la multa por comisión de ilícito penal a que el mismo precepto se refiere), el Tribunal se detiene en resolver dos asuntos preliminares: el de la concurrencia en la cuestión planteada de los requisitos que el ordenamiento exige (aplicabilidad y relevancia al caso, que, obviamente, estima presentes) y, en segundo término, el análisis interpretativo del art. 91 CP para, a partir de éste, arrojar luz sobre los problemas constitucionales de fondo que plantea:

1) La responsabilidad personal y subsidiaria que prevé el precepto no debe identificarse necesariamente con el arresto penitenciario, sino que, más propiamente, sólidas razones interpretativas aconsejan entender que la fórmula de restricción de libertad más acorde con la finalidad del mismo es el arresto domiciliario.

2) Existe un alto número de paliativos y suavizaciones que rodean la medida: fijación de un límite máximo de duración en el art. 91 CP, se permite la suspensión condicional de la condena (art. 93 CP), y el Tribunal penal puede autorizar el pago de la suma en plazos (art. 90.2 CP). Por su parte, como es lógico, el prudente arbitrio del Tribunal penal no es un acto enteramente discrecional, sino que se halla sujeto al principio de favor de la libertad individual.

3) No es, en puridad, el art. 91 CP una pena, sino una modalidad legal para que, en casos de inejecución, la pena efectivamente impuesta (la multa) se cumpla.

A partir de esta inteligencia del precepto cuestionado, la sentencia irá contrastando el sentido y finalidad del mismo con las diversas normas y principios constitucionales que, a juicio del promotor del proceso, presuntamente vulneraría:

*a)* No lesiona el principio de igualdad en el contenido de la ley, discriminando a los condenados insolventes («la pena a la pobreza» de que hablaba Q. Ripollés), pues no es una regla diferenciadora, sino hipotética para el caso de que se incumpla una obligación, la sentencia firme de condena.

*b)* No vulnera el derecho a la libertad, dado el conjunto de garantías que rodean la adopción de la medida en cuestión. Además, el art. 5.1.a) del Convenio de Roma de 1950 admite la restricción de libertad al penado legalmente en virtud de sentencia dictada por Tribunal competente. Ni busca establecer una equivalencia entre patrimonio y libertad, sino hacer frente a un supuesto de inejecutibilidad de la pena principal.



c) Tampoco cabe apreciar erosión del principio de culpabilidad, porque el art. 91 CP en realidad pretende evitar la impunidad de una persona ya condenada.

d) No lesiona la finalidad de reinserción social de las penas, pues el Tribunal penal tiene una gran capacidad de arbitrio para atender a la situación económica del reo, constituyendo su aplicación, por si fuera poco, una última medida o recurso.

e) No hay violación del art. 25.3, que prohíbe la imposición de penas privativas de libertad en el ámbito del derecho administrativo sancionador, por la simple razón de que no es aplicable; en el Derecho penal sí caben legítimamente (máxime si se tiene en cuenta que la redacción actual del artículo 91 CP se introduce por Ley Orgánica posconstitucional).

f) En fin, de ningún modo cabe apreciar que el art. 91 CP ignore el principio de proporcionalidad de las penas, pues, según lo expuesto, ni siquiera se trata de una pena, sino, únicamente, de una medida sustitutiva a la pena de multa inejutable.

Sentencia núm. 20/88, de 18 de febrero (núm. Reg. 29/84), «BOE» núm. 52.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Leguina Villa.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña.

**Acto impugnado:** Artículo 15.2 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico.

**Preceptos de referencia:** Artículos 36 y 149.1.18 de la CE; 38.2 y 75 de la LOTC y 9.23 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

**Cuestiones analizadas:** Efecto obstativo de las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad. Naturaleza de los Colegios Profesionales; competencia en orden a su regulación.

**Precedentes jurisprudenciales:** Respecto a la naturaleza de los Colegios Profesionales: Sentencias núms. 76/83, de 5 de agosto; 23/84, de 20 de febrero, y 123/87, de 15 de julio.

**Comentario:**

La sentencia resuelve dos problemas: uno previo de forma, si el efecto obstativo del art. 38.2 LOTC es aplicable tanto a las sentencias desestimatorias recaídas en recursos de inconstitucionalidad como a las dictadas en procedimientos de control previo de inconstitucionalidad (cuando tal vía aún era posible para proyectos de Leyes Orgánicas y Estatutos de Autonomía), y otro de fondo, naturaleza de los Colegios Profesionales y, consecuentemente, a quién corresponde la competencia normativa sobre los mismos. En relación al primero, niega la sentencia, con arreglo a una interpretación literal y sistemática, que pueda extenderse el efecto del art. 38.2 LOTC a otros procedimientos distintos al del recurso directo de inconstitucionalidad (como el control previo y la cuestión de inconstitucionalidad).

El precepto cuya constitucionalidad se rechaza por el recurrente atribuía al Estado la legislación básica sobre los Colegios Profesionales. Por su parte, el art. 9.23 del Estatuto catalán otorga a esta Comunidad la competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales, «sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 36 y 139 de la CE». A juicio de la parte actora, el ejercicio de su competencia quedaría inválidamente afectado por la reserva a ley estatal que introduce el art. 15.2 de la Ley 12/1983, pues el art. 36 CE no incorpora norma alguna atributiva de competencias. Además, tampoco encontraría justificación el precepto impugnado en base a la competencia exclusiva que el artículo 149.1.18 atribuye al Estado en materia de Administraciones Públicas, pues los Colegios Profesionales no lo son.

El Tribunal no acepta estos dos argumentos. En efecto, en primer lugar afirma que si bien el art. 36 CE no puede ser entendida como una norma atributiva de competencia al Estado, tampoco significa que éste carezca de todo título habilitante para intervenir en la materia, ni tampoco que el grado de competencia estatal sea sólo el que resulte de los propios términos de los Estatutos de Autonomía. Respecto al segundo de los argumentos del recurrente, la sentencia, tras reiterar su doctrina acerca de la naturaleza jurídica de los Colegios Profesionales (Corporaciones sectoriales para la defensa de los intereses privados de sus miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público, en razón de las cuales se configuran legalmente como Corporaciones de Derecho público; que se hayan bajo la dependencia o tutela de Administraciones territoriales —que delegan en ellas competencias administrativas—), estima consecuentemente, por el contrario, que se hallan equiparados a las Administraciones Públicas, aunque sólo sea a los efectos organizativos y competenciales en los que se concreta su dimensión pública. Por lo que el fundamento constitucional de la legislación básica estatal en este

campo se hallaría en el mencionado art. 148.1.18 CE (como también lo era, según doctrina del Tribunal, en relación a las Corporaciones de Derecho público representativas no ya de intereses profesionales, sino económicos). El que, desde esta luz, el art. 15.2 de la Ley del Proceso Autonómico resulte redundante respecto a tal precepto constitucional, tampoco ha de conducir, concluye la sentencia, a su anulación por inconstitucional.

**Sentencia núm. 21/88, de 18 de febrero (núm. Reg. 701/84), «BOE» núm. 52.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sr. Rodríguez-Piñero.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Presidente del Gobierno de la nación.

**Acto impugnado:** Artículo 15.5 de la Ley de la Generalidad Valenciana 7/1984, de 4 de julio, de creación de la Entidad Pública Radiotelevisión Valenciana y regulación de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalidad Valenciana.

**Preceptos de referencia:** Artículo 149.1.27 de la CE; 37.1 del Estatuto de Autonomía Valenciano; 7 y Disposición Final primera de la Ley 46/1983, de 26 de diciembre, reguladora del tercer canal de televisión, y 2 y 20.1 de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto Jurídico de Radio y Televisión.

**Cuestiones analizadas:** Distribución de competencias en materias de radio y televisión; tercer canal de televisión y emisión y transmisión de éste por cable.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 10/82, de 23 de marzo; 26/82, de 24 de mayo, y 44/82, de 8 de julio.

**Comentario:**

Realiza la sentencia la siguiente argumentación (de lo general a lo particular), que le conduce a estimar parcialmente el recurso:

a) El artículo 149.1.27 CE atribuye al Estado competencias exclusivas sobre las normas básicas del régimen de la radio y la televisión, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo o ejecución correspondan a las CC. AA.

Respecto a estas facultades, según doctrina precedente, el Tribunal ha afirmado que, aunque la norma atributiva de competencias es, en principio, el Estatuto, éste puede, en ocasiones, restringir la asunción de competencias y remitirse también a una ley. Este es el caso del art. 37.1 del Estatuto Valenciano, que se remite a las normas básicas del Estado y a los términos y casos establecidos por el Estatuto Jurídico de la Radio y Televisión. De este modo, unas competencias —de desarrollo y ejecución— que hubieran podido ser asumidas de modo exclusivo por la Comunidad Autónoma, se han convertido en unas competencias compartidas con el Estado.

b) Del análisis de la normativa aplicable se infiere con facilidad que los sistemas de emisión y transmisión por cable han sido objeto de una reserva exclusiva a favor de RTVE para todo el territorio nacional.

c) A pesar de lo anterior, esto es, aun careciendo la Comunidad Valenciana de título competencial por estar reservado a un organismo del Estado, el art. 15.5 de la Ley valenciana 7/1984 permitía la creación de sociedades filiales en el área de cable, por lo que la referencia a «cable» en tal artículo es declarada inconstitucional.

**Sentencia núm. 22/88, de 18 de febrero (núm. Reg. 205/86), «BOE» núm. 52.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. García-Mon.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.2 de la CE; 340 bis, a), 1 del CP; artículos 297, 299 y 741 de la LECr.

**Cuestiones analizadas:** Presunción de inocencia y prueba de la alcoholemia; el valor de ésta como elemento determinante del supuesto delictivo; el atestado policial sólo tiene valor como denuncia del hecho enjuiciado penalmente; exigencia de una mínima actividad probatoria para desvirtuar la presunción de inocencia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias núms. 107/85, de 7 de octubre; 145/85, de 28 de octubre; 148/85, de 30 de octubre, y 174/85 y 175/85, ambas de 17 de diciembre.

**Comentario:**

Reitera, y sistematiza, la jurisprudencia anterior sobre la misma cuestión analizada.

**Sentencia núm. 23/88, de 22 de febrero (núm. Reg. 1387/86), «BOE» número 67.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1, 117.1 y 163 de la Constitución.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e inaplicación de una ley por supuesta inconstitucionalidad. La cuestión de inconstitucionalidad. Monopolio del Tribunal Constitucional para la declaración de inconstitucionalidad.

**Comentario:**

Aunque suscitar la cuestión de inconstitucionalidad sea una prerrogativa exclusiva e irrevocable de los Organos Judiciales, la inaplicación explícita de una norma legal por supuesta inconstitucionalidad, sin el previo planteamiento de la cuestión, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

**Sentencia núm. 24/88, de 23 de febrero (núm. Reg. 523/86), «BOE» número 67.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio (voto particular del Sr. Rubio Llorente).

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE; 44.1.a) de la LOTC; artículos 64 y 102 de la LJCA.

**Cuestiones analizadas:** Agotamiento de la vía judicial precedente. Derecho a la tutela judicial efectiva y emplazamiento personal y directo en el proceso contencioso.

**Precedentes jurisprudenciales:** Emplazamiento personal y directo: como más recientes, Sentencias 182/87, de 17 de noviembre, y 188/87, de 27 de noviembre.

**Comentario:**

Los dos temas que ocupan la presente sentencia han sido reiteradamente abordados en jurisprudencia precedente, si bien aquí se formulan en términos especialmente precisos y con alguna puntualización de interés.

En cuanto al requisito exigido por el art. 44.1.a) de la LOTC, agotamiento de la vía judicial previa, la sentencia dirá: «Los recursos cuya interposición es exigible para entender agotada la vía judicial son los normales y claramente ejercitables, y es manifiesto que esta condición no se da en el recurso extraordinario de revisión creado por la LJCA.»

Por lo que se refiere al régimen de emplazamientos en el proceso contencioso administrativo, reitera la relevancia constitucional del emplazamiento personal del titular de interés legítimo, pero advierte igualmente de la necesidad de ponderar, en cuanto también es digno de atención, «el interés objetivo en no aumentar la complejidad y duración del procedimiento jurisdiccional, haciendo pesar sobre el Tribunal el deber de recabar datos de personas cuya identidad desconoce y también lo es, en fin, el interés del litigante de buena fe que obtuvo en su día sentencia estimatoria de su pretensión frente a la Administración».

Sentencia núm. 25/88, de 23 de febrero (núm. Reg. 563/86), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24.2 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Presunción de inocencia.

**Precedentes jurisprudenciales:** Véase la Sentencia 54/1986, de 7 de mayo, de jurisprudencia allí citada (núm. 18/1986 de esta Revista).

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 26/88, de 23 de febrero (núm. Reg. 941/86), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Estimatorio (voto particular del Sr. Díez-Picazo).

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 de la CE y 483 a 496 y 1687 de la LEC.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e inadmisión de recurso de casación.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia del Tribunal Constitucional 10/1987, de 29 de enero.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 27/88, de 23 de febrero (núm. Reg. 85/87), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rubio Llorente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 14 y 24.1 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley; contenido. Principio de igualdad en la ley. Derecho a la tutela judicial efectiva y congruencia de las resoluciones judiciales.

**Comentario:**

Aunque matizando algún extremo de la exigencia constitucional de que las resoluciones judiciales sean congruentes y den respuesta a las cuestiones suscitadas por las partes («el alegato de la hoy recurrente...», que el Tribunal Central no aceptó por razones que hay que aceptar, pero que en cuanto atinentes sólo a la interpretación de una norma y no a la valoración de datos objetivos aducidos por la otra parte no era necesario explicitar»), la Sala reitera en cuanto a las cuestiones analizadas, criterios jurisprudenciales precedentes.

Sentencia núm. 28/88, de 23 de febrero (núm. Reg. 580/87), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.



**Preceptos de referencia:** Artículo 25.2 de la C

**Cuestiones analizadas:** Alcance de los principios penitenciarios consagrados en la Constitución.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia 2/1988, de 21 de enero.

**Comentario:**

La pretensión invocada carece de contenido constitucional desde la perspectiva del recurso de amparo.

**Sentencia núm. 29/88, de 29 de febrero (núm. Reg. 190/86), «BOE» núm. 67.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Begué Cantón.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24.1 de la Constitución y Disposiciones Transitorias de la Ley 34/84, de 6 de agosto, de Reforma de la LEC.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e inadmisión de recurso de casación; significado de las exigencias formales.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia núm. 81/86, de 20 de junio.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 30/88, de 29 de febrero (núm. Reg. 863/86), «BOE» núm. 67.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sra. Begué Cantón.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 14 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad; el art. 28.3.d) del Decreto 2.530/70, de 20 de agosto.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia 189/87, de 24 de noviembre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 31/88, de 29 de febrero (núm. Reg. 44/87), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. López Guerra.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 14 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia 189/87, de 24 de noviembre.

**Comentario:**

Problema similar al analizado en la sentencia precedente, reiterando la jurisprudencia allí sentada.

Sentencia núm. 32/88, de 29 de febrero (núm. Reg. 747/88), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 14 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia 189/87, de 24 de noviembre.

**Comentario:**

Problema similar al analizado en las dos sentencias precedentes.

Sentencia núm. 33/88, de 29 de febrero (núm. Reg. 1061/87), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sra. Begué Cantón.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 14 de la CE.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencia 189/87, de 24 de noviembre.

**Comentario:**

Problema similar al analizado en las sentencias inmediatamente precedentes, reiterando la jurisprudencia allí sentada.

Sentencia núm. 34/88, de 1 de marzo (núm. Reg. 493/87), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Entidad Local Menor.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24.1 de la Constitución y artículo 64 de la LJCA.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial y efectiva y emplazamiento personal y directo en el proceso contencioso.

**Comentario:**

Aunque la jurisprudencia precedente ha considerado en alguna ocasión que «los Organismos oficiales y Ayuntamientos deben prestar más atención que los particulares a las notificaciones edictales de la existencia de procesos contencioso-administrativos», en el presente caso la Sala estima que debe prevalecer la obligación de los jueces y tribunales de promover las posibilidades de defensa de todos aquellos que pudieran ser afectados en sus derechos e intereses legítimos por la decisión de un proceso contencioso-administrativo, y el consiguiente carácter excepcional del emplazamiento edictal.

Sentencia núm. 35/88, de 2 de marzo (núm. Reg. 302/85), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Latorre.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 14 de la Constitución.

**Cuestiones analizadas:** Principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley.

**Precedentes jurisprudenciales:** Por todos, Sentencia 181/87, de 13 de noviembre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 36/88, de 3 de marzo (núm. Reg. 274/86), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Latorre.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24.1 de la Constitución.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias 68/82, de 26 de junio, y 6/86, de 21 de enero.

**Comentario:**

La inadmisión de un recurso contencioso-administrativo en base a un error patente, conduce a la estimación del amparo solicitado.

Sentencia núm. 37/88, de 3 de marzo (núm. Reg. 604/85), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Estimatorio (voto particular del Sr. De la Vega Benayas al que se adhieren los Sres. García Mon, Díaz Eimil y Rubio Llorente).

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 y 2 de la Constitución; artículo 876 de la LECr; artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, y artículo 6.3 del Convenio de Roma.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial y recurso de casación penal; su desestimación tras la excusa de dos letrados de oficio y el «visto» del fiscal. Derecho a la asistencia de letrado.

**Precedentes jurisprudenciales:** Como más significativo es preciso señalar la sentencia 42/82, de 5 de julio; se citan igualmente en la sentencia aquí glosada las 7/82, de 14 de diciembre; 60/85, de 6 de mayo; 140/85, de 21 de octubre; 57/1986, de 14 de mayo, y 123/86, de 22 de octubre.

#### **Comentario:**

Sentencia de importantes repercusiones en el ordenamiento por cuanto declara inconstitucional y por tanto derogado la última frase del artículo 876.2 de la LECr en cuanto que al cerrar el paso a la casación penal, tras la excusa de dos letrados designados de oficio para interponer el recurso y el «visto» del Ministerio Fiscal, contraviene el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución tal como es interpretado por los Tratados Internacionales ratificados por España y por la jurisprudencia precedente del propio tribunal, a cuya doctrina general se hace abundante referencia.

A mayor abundamiento, en la medida en que la decisión judicial de no tener por interpuesto el recurso se adopta sin conocimiento del afectado, al no serle notificado ninguna de las tres denegaciones para interponer y fundamentar su recurso de casación, tal decisión vulnera igualmente el derecho a la asistencia letrada, pues aquél no pudo designar libremente abogado defensor «una vez frustrada indebidamente en el caso la defensa por el turno de oficio».

Por lo demás, junto a la indicada importancia de la argumentación de esta sentencia, en la medida en que declara derogado un precepto del ordenamiento y modula el contenido del artículo 24 de la Constitución, la sentencia tiene además interés doctrinal y técnico en la medida en que sus argumentaciones la llevan a formular recomendaciones al legislador («el

legislador deberá proveer con una norma de rango legal que disponga...») y a establecer un cierto derecho transitorio, aspectos que en gran parte motivan el voto particular.

Sentencia núm. 38/88, de 9 de marzo (núm. Reg. 860/86), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Truyol Serra.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Juzgado de Distrito.

**Preceptos de referencia:** Artículos 20.1.a y 24.1 de la Constitución; artículos 437 y 448 a 453 de la LOPJ.

**Cuestiones analizadas:** Libertad de expresión y defensa de los abogados en su actuación forense; procedimiento sancionador.

**Comentario:**

La sentencia declara que una vez aprobada la LOPJ, que regula las vías de corrección de las eventuales faltas de respeto o desobediencia leve que pueden cometer los abogados en su actuación forense, ésta será el cauce a seguir como procedimiento sancionador y no el previsto en el Código Penal. La débil conexión entre este problema de legalidad ordinaria y las garantías constitucionales la halla la Sala en que la libertad de expresión y defensa se vincula en el artículo 437.1 de la LOPJ a la dignidad de su función.

Sentencia núm. 39/88, de 9 de marzo (núm. Reg. 59/87), «BOE» núm. 67.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Auto de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24 de la Constitución; artículos 11 y 238 a 243 de la LOPJ, y artículo 10 de la LECr.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y exigencia de firma de abogado en actos procesales.

**Comentario:**

El no cumplimiento de la exigencia que el artículo 10 de la LEC impone para que con carácter general los actos procesales de los litigantes lleven la firma de abogado, no debe comportar en principio la nulidad del acto afectado, debiendo reinterpretarse el precepto procesal a tenor del artículo 24 de la Constitución con criterios que se han plasmado en la LOPJ.

**Sentencia núm. 40/88, de 10 de marzo (núm. Reg. 1263/86), «BOE» núm. 67.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díez Picazo.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Providencia de Audiencia Territorial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24 y 121 de la Constitución.

**Cuestiones analizadas:** Error judicial. Derecho a la tutela judicial efectiva y sobreseimiento provisional.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.



Sentencia núm. 41/88, de 14 de marzo (núm. Reg. 1286/86), «BOE» núm. 88.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Rodríguez Piñero.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Ente Público Radio-Televisión Española.

**Acto impugnado:** Auto del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24.1 de la Constitución; artículo 4.1.c de la LOTC; artículo 181 de la LPL.

**Cuestiones analizadas:** Invocación formal del derecho constitucional vulnerado. Derecho a la tutela judicial efectiva y doble instancia; el incumplimiento por RTVE de la obligación de consignar el depósito previsto por el artículo 181 de la LPL.

**Precedentes jurisprudenciales:** El incumplimiento por RTVE: Sentencias 180/1987, de 12 de noviembre, y 18/1988, de 16 de febrero.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 42/88, de 15 de marzo (núm. Reg. 491/87), «BOE» núm. 88.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo

**Ponente:** Sr. García Mon.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24.1 de la Constitución.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e incongruencia procesal.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 43/88, de 16 de marzo (núm. Reg. 508/87), «BOE» núm. 88.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. De la Vega Benayas.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Sociedad Anónima.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Supremo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 14 y 24.1 de la Constitución; artículos 1729 a 1736 de la LEC, y Ley de 22 de diciembre de 1953.

**Cuestiones analizadas:** Arbitraje de equidad y derecho a la tutela judicial efectiva.

**Comentario:**

Dentro de las muy heterogéneas imputaciones que se hace por la parte recurrente a la sentencia impugnada, la Sala otorga el amparo en relación a una de las peticiones formuladas, realizando un detallado examen de los caracteres del arbitraje de equidad y de las condiciones y límites que pesan sobre la actuación judicial cuando el objeto de litigio es un laudo de equidad.

Sentencia núm. 44/88, de 17 de marzo (núm. Reg. 1096/86), «BOE» núm. 88.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. García Mon.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto de Audiencia Provincial.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 y 117.3 de la Constitución.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a defensa.

**Comentario:**

En la medida en que el derecho de defensa ha de conjugarse con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas la Sala estima que no es posible acceder a la pretensión del recurrente, por cuanto podría entrañar mantener indefinidamente abierto un proceso penal.

**Sentencia núm. 45/88, de 17 de marzo (núm. Reg. 567/87), «BOE» núm. 88.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sra. Begué Cantón.

**Fallo:** Estimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículo 24.1 de la Constitución.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva e incongruencia procesal.

**Precedentes jurisprudenciales:** Por todos, Sentencia 42/1988, de 15 de marzo.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

**Sentencia núm. 46/88, de 21 de marzo (núm. Reg. 659/86), «BOE» núm. 88.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Díaz Eimil.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Auto de Juzgado Central de Instrucción (pese a tal afirmación del recurrente, la Sentencia considera que el acto recurrido es una Orden del ministro del Interior).

**Preceptos de referencia:** Artículos 17.1 y 3, 24.2 y 55.2 de la Constitución; artículo 15.1 de la LO 9/1984, de 26 de diciembre, y artículo 527.a) de la LECr.

**Cuestiones analizadas:** Derecho de libertad y orden gubernativa de comunicación. Derecho a la asistencia letrada.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sentencias 196/87, de 11 de diciembre, y 199/87, de 16 de diciembre.

**Comentario:**

Reitera jurisprudencia precedente.

Sentencia núm. 47/88, de 21 de marzo (núm. Reg. 1421/86), «BOE» núm. 88.

**Tipo de procedimiento:** Recurso de amparo.

**Ponente:** Sr. Tomás y Valiente.

**Fallo:** Desestimatorio.

**Actor:** Particular.

**Acto impugnado:** Sentencia del Tribunal Central de Trabajo.

**Preceptos de referencia:** Artículos 24.1 y 37.1 de la Constitución; artículo 533.2 de la LEC; artículo 90.5 del ET; artículo 136 de la LPL, y artículo 17.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

**Cuestiones analizadas:** Derecho a la tutela judicial efectiva y restricciones en la legitimación para impugnar un convenio colectivo.

**Precedentes jurisprudenciales:** Respecto al problema de las restricciones para accionar judicialmente y las decisiones de inadmisión, se citan en el

fundamento jurídico de la sentencia comentada las sentencias 61/1982, de 13 de octubre; 68/1983, de 26 de julio; 102/1984, de 12 de noviembre y, especialmente, por ser un supuesto más próximo al aquí contemplado, la 4/1987, de 23 de marzo.

**Comentario:**

El tema de fondo que debate la presente sentencia es el de la posible inconstitucionalidad de las limitaciones de la legitimación para accionar en vía judicial en defensa de derechos e intereses que se consideren vulnerados por cláusulas de convenios colectivos. La Sala, con apoyo en jurisprudencia precedente desestima el recurso.

**Sentencia núm. 48/88, de 22 de marzo (núms. Reg. 873 y 913/85), «BOE» núm. 88.**

**Tipo de procedimiento:** Recurso de inconstitucionalidad.

**Ponente:** Sra. Begué Cantón.

**Falle:** Estimatorio.

**Actor:** Gobierno de la Nación.

**Acto impugnado:** Ley 15/1985, de 1 de julio, del Parlamento de Cataluña, de Cajas de Ahorro de Cataluña, y Ley 7/1985, de 17 de julio, del Parlamento de Galicia, de Cajas de Ahorro Gallegas.

**Preceptos de referencia:** Artículos 149.1.11 y 13 de la Constitución; artículos 9.24, 10.1.4 y 12.1.6 del Estatuto de Cataluña; artículos 27.26 y 30.1.5 del Estatuto de Galicia, y Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre Organos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA).

**Cuestiones analizadas:** Noción de «Bases» como criterio de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Competencias estatales y autonómicas en materia de Cajas de Ahorros; régimen jurídico; órganos de gobierno; inspecciones, sanciones, intervención.

**Precedentes jurisprudenciales:** Sobre la noción de bases, Sentencias 32/1981, de 28 de julio; 1/1982, de 28 de enero (específicamente sobre un pro-

blema de Cajas de Ahorros); 35/1982, de 14 de junio; 39/1982, de 30 de junio; 64/1982, de 4 de noviembre; 25/1983, de 7 de abril; 32/1983, de 28 de abril; 24/1985, de 21 de febrero, y 137/1986, de 6 de noviembre.

**Comentario:**

Sentencia de extensa argumentación que aborda la constitucionalidad de sendas leyes catalana y gallega por la que se regulan las Cajas de Ahorros en las respectivas Comunidades. Resumiendo los aspectos generales de la doctrina sentada en la sentencia, pueden sumariarse en los siguientes puntos:

1. El título competencial específico, en esta ocasión la competencia autonómica en materia de Cajas de Ahorros en el marco de las bases de la ordenación del crédito y de la planificación general de la actividad económica, debe ser el que sirva de parámetro al Tribunal, y no el más general, como sería en esta ocasión la competencia autonómica sobre Fundaciones o Entidades benéfico-sociales.

2. La noción de bases, repetidamente abordada por el Tribunal se ve ya reiterada, ya completada con las siguientes afirmaciones:

- Dentro de las bases pueden incluirse como parámetro para el Tribunal la legislación estatal posterior a la ley autonómica cuestionada, si aquella está vigente en el momento del examen jurisdiccional (en el presente conflicto la LORCA).
- Las bases pueden estar contenidas tanto en normas posconstitucionales como en normas preconstitucionales.
- La noción de bases es de carácter material más allá de la calificación que pueda realizar el legislador estatal.

3. El modelo organizativo de las Cajas de Ahorros contenido en la LORCA está informado por dos principios: principio democrático y principio representativo, en función de los cuales hay que entender que constituyen normas básicas sobre la materia aquellas destinadas a asegurar la configuración de las Cajas de Ahorros de acuerdo con aquéllas.

Sobre la base de tales consideraciones generales, la sentencia analiza los concretos preceptos impugnados agrupados en torno a cuatro temas: Régimen jurídico de las Cajas de Ahorros (constitución, fusión, liquidación y registro); Organos de gobierno de aquéllas; Régimen de inspección, sanciones, intervención y, finalmente, Disposiciones transitorias de las leyes impugnadas.